MANUEL CASTELLS
CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA Y URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA. BERKELEY.

MARCELLO CAPRARELLA
DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA.

FANNY HERNÁNDEZ BROTONS
TRADUCTORA Y ESTUDIANTE DE CIENCIAS POLÍTICAS EN LA UCM.

PAMELA RADCLIFF
PROFESORA DE HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA. SAN DIEGO.

ELISABETH LORENZI
DOCTORA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL POR LA UCM.

PABLO SÁNCHEZ LEÓN
PROFESOR DE HISTORIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA UCM.

FÉLIX LÓPEZ REY
MIEMBRO FUNDADOR DE LA AV MESETA DE ORCASITAS E IMPULSOR DEL PROCESO DE REMODELACIÓN DE BARRIOS.

PACA SAUQUILLO
ABOGADA LABORALISTA. EX EURODIPUTADA SOCIALISTA Y FUNDADORA DEL MPDL.

VÍCTOR RENES
MIEMBRO FUNDADOR DE LA AV DE SAN FERMÍN (USERA).

MARÍA DEL PRADO DE LA MATA
MIEMBRO DE LA AV LA UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FRAVM.

MARÍA ROCES
DESDE 2003 TRABAJA EN LA COMISIÓN DE URBANISMO Y REHABILITACIÓN URBANA DE LA FRAVM.

VICENTE PÉREZ QUINTANA
SOCIÓLOGO, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA VECINAL SAN BLAS SIMANCAS Y RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA FRAVM.

TOMÁS RODRÍGUEZ VILLASANTE
PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UCM.

ANDRÉS WALLISER
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA POR LA UAM Y EXPERTO EN SOCIOLOGÍA URBANA.

TERESA BONILLA
ARQUITECTA-URBANISTA. PROFESORA ASOCIADA EN LA ETS DE ARQUITECTURA DE MADRID.

JAIME BAQUERO
PROFESIONAL SANITARIO. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID Y DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LA FRAVM.

CARMEN SAN JOSÉ
DOCTORA EN MEDICINA. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID Y DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LA FRAVM.

JULIO ALGUACIL GÓMEZ
MIEMBRO FUNDADOR DE LA AV LA INCOLORA DE VILLAVERDE ALTO. PROFESOR DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

CONCEPCIÓN DENCHE MORÓN
MIEMBRO FUNDADORA DE LA AV LA INCOLORA DE VILLAVERDE ALTO Y SOCIÓLOGA.

MANUEL BASAGOITI Y PALOMA BRU
SOCIÓLOGOS EXPERTOS EN INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y DESARROLLO LOCAL. MIEMBROS DE REDES.

JORDI BORJA
GEÓGRAFO Y URBANISTA. CO-DIRECTOR POSGRADO "GESTIÓN DE LA CIUDAD" DE LA UOC.

NACHO MURGUI
MIEMBRO DE LA AV LOS PINOS DE RETIRO SUR Y DEL CENTRO SOCIAL SECO. PRESIDE LA FRAVM DESDE 2007.

Vicente Pérez Quintana
y Pablo Sánchez León (eds.)

Memoria ciudadana y movimiento vecinal

MADRID 1968-2008

CATARATA

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

ESTE LIBRO HA RECIBIDO EL APOYO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

DISEÑO COLECCIÓN: ESTUDIO PÉREZ-ENCISO
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: JACOBO PÉREZ-ENCISO

© AUTORES, 2008

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2008
FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 05 04
FAX 91 532 43 34
WWW.CATARATA.ORG

MEMORIA CIUDADANA Y MOVIMIENTO VECINAL. MADRID 1968-2008

ISBN: 987-84-8319-407-2
DEPÓSITO LEGAL: M-58.900-2008

ESTE MATERIAL HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONS-

A LA MEMORIA DE LUIS JAVIER BENAVIDES, SERAFÍN HOLGADO, ÁNGEL RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO Y ENRIQUE VALDEVIRA, VÍCTIMAS DEL ATENTADO ULTRADERECHISTA CONTRA EL DESPACHO DE ABOGADOS LABORALISTAS DE LA CALLE ATOCHA, EL 24 DE ENERO DE 1977.

A ARTURO PAJUELO, DIRIGENTE DE LA AV GUETARIA Y DE LA COORDINADORA DE BARRIOS EN REMODELACIÓN, ASESINADO EL 1 DE MAYO DE 1980.

A LAS MILES DE PERSONAS ANÓNIMAS QUE HAN DEDICADO SU VIDA AL MOVIMIENTO VECINAL, CUYA HISTORIA MERECE SER CONTADA.

en la sociedad civil la izquierda no pudo mantenerse en el poder municipal. Pero como el pulso de la ciudad sigue latiendo y los problemas cotidianos se acumulan, mientras los políticos pasan, la gente queda y genera nuevas reivindicaciones, nuevas propuestas, nuevos sueños. En definitiva, un nuevo movimiento ciudadano. Pero eso ya es otra historia. Una historia que se enraíza con la historia de lo que fue y se proyecta hacia un horizonte de lo que puede ser.

CAPÍTULO 2

LA LUCHA POR LA CIUDAD: VECINOS-TRABAJADORES EN LAS PERIFERIAS DE MADRID, 1968-1982

MARCELLO CAPRARELLA
FANNY HERNÁNDEZ BROTONS

VIENEN OCURRIÉNDOME COSAS EXTRAVAGANTES, DESORDENADAS, DOMINÁNDOME SENSACIONES QUE UN POLICÍA ESPAÑOL LLAMARÍA, PRIMERO QUE NADA, ANTIFRANQUISMO. SOBRE TODO, DESDE QUE FRANCO MURIÓ, TENGO ESOS REPENTES Y ME LANZO DESENCAJADO A LA CALLE. [...] PREFIERO IR YO SOLO, AUNQUE ME ACERQUE A LAS MANIFESTACIONES CONVOCADAS EN EL CENTRO DE MADRID, QUE CASI SIEMPRE SON PROHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES. ME AGRUPO ENTRE LOS OBREROS O GENTE DESCONOCIDA [...] CANALLAS, ASESINOS, FASCISTAS, VIVA LA LIBERTAD, VIVA LA LIBERTAD Y LA AMNISTÍA PARA TODOS LOS HOMBRES [...] POCO A POCO, LAS PERSONAS, COMO SOMBRAS VAN PARÁNDOSE EN LA CALLE Y QUEDAN JUNTAS EN CONFUSO ESPANTO [...] HASTA QUE LLEGA LA LUZ DE GOLPE. ESTALLA LA LUZ ELÉCTRICA CON EL VOCERÍO DE TODA LA CIUDAD, COMO SI ACABARA ALGUIEN DE INVENTAR LA LUZ Y LA VIERAN POR PRIMERA VEZ.

Antonio Ferres (1983), *Cuentos*

"¿A Ud. qué le parece que un hombre sea más viejo que una ciudad? Esto antes no pasaba..." Quien propone esta reflexión al lector es un personaje de la novela *El mágico aprendiz* de Luis Landero, ambientada en el Madrid de los últimos años del siglo XX (1999, 191). Al final de sus días, un anciano obrero dirige una mirada retrospectiva sobre su etapa como asalariado de una pequeña fábrica de cartones y derivados entre Getafe y Fuenlabrada, en la que trabajó hasta su cierre en 1975: "cuando se inauguró la fábrica, no había nada, sólo campo. Yo he visto cómo nacía Fuenlabrada, y ya hace años que observo cómo se acerca cada vez más. Llegará el día en que esto también sea Fuenlabrada".

A mediados de los setenta, Fuenlabrada, al igual que Parla o Alcalá de Henares, municipios de la segunda corona del área metropolitana de Madrid, ya se encuentran en la frontera entre la ciudad y el campo. Previamente, Villaverde, Vallecas, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Leganés, y otros tantos municipios de la primera corona del área habían experimentado espectaculares crecimientos poblacionales y de actividad industrial. Este doble proceso de expansión que, desde la sensibilidad individual de un

personaje de ficción acontece en un lapso de tiempo inferior a la vida de un hombre, se puede enmarcar con mayor precisión en un arco cronológico que se inicia en los años del *desarrollismo* franquista y atraviesa la transición a la democracia, continuando incluso después, a lo largo de la década de los ochenta.

En estas áreas de reciente industrialización, receptoras de una inmigración abandonada a su suerte por la capital —incapaz de absorberla ofreciéndole condiciones de vida dignas— tuvo especial arraigo el movimiento obrero. De éste son notorias durante esos años las reivindicaciones de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, a las que se suman, en un primer periodo que abarca el tardofranquismo y la transición a la democracia, toda una serie de reivindicaciones políticas. Es importante señalar que, en ese contexto inicial en el que no cabía la protesta, incluso la reivindicación más material adquiría un cariz político (Domènech, 2002). Esto ayuda a entender y contextualizar el tema que ocupa el centro de atención de este texto: la confluencia de objetivos y prácticas del movimiento obrero y el movimiento vecinal, entre las luchas en las fábricas y las protestas en las calles.

Podemos entender el sustrato común de estos dos movimientos como una lucha por el estado de los barrios, por la ciudad. La de los vecinos fue la más visible de las formas de movilización de una época crucial de la caída de la dictadura, que ejemplifica la demanda de reconocimiento ciudadano especialmente en los distritos del eje sureste de la periferia y municipios de las coronas del área metropolitana de Madrid. En efecto, a pesar de la intensidad y extensión de la movilización obrera en los años setenta, las repetidas tomas simbólicas de las calles por miles de manifestantes constituyeron el principal órdago a la estructura rígida, aunque ya agrietada, del aparato franquista. En ellas se dieron cita toda una serie de actores: vecinos y trabajadores de las periferias, sindicatos y también partidos de la izquierda menos moderada.

La lucha por la ciudad fue por tanto, en primer lugar, la fragua de una doble identidad entre los vecinos de esos distritos y barrios que igualmente eran, en su mayoría, trabajadores de fábricas. Junto con otros vecinos profesionales liberales y de clases medias, estos vecinos-trabajadores se organizaron para denunciar el estado de deterioro y abandono de sus núcleos urbanos de reciente formación, la pésima calidad de sus viviendas y la carencia más absoluta de infraestructuras básicas asociadas a las mismas (de educación, sanidad, transporte y ocio). Desde el otro lado de la línea de frente, la contra-lucha fue la de la Administración local previa a la llegada de los ayuntamientos democráticos por mantener alejados de la capital a sus núcleos más compactos y reivindicativos, entre los que destacan, quizá aun más

que los municipios del eje sureste, distritos de la periferia como Vallecas, Villaverde, Orcasitas, Aluche, Carabanchel o San Blas.

En segundo lugar, la lucha por la ciudad fue el canal a través del cual los vecinos-trabajadores de los barrios, organizados en asociaciones hasta conformar un movimiento, se convirtieron en ciudadanos de hecho, al mostrarse capaces de traducir sus quejas por los desmanes heredados del desarrollismo franquista y por los efectos de la crisis económica en reivindicaciones de derechos y de personalidad política, dotándose para ello de formas de participación desde la base así como de un nuevo repertorio de acción colectiva (Castells, 1984). Y también fue el canal a través del cual obtuvieron el reconocimiento de la condición de ciudadanos de pleno derecho, después de librar una compleja batalla por la legalización de sus órganos de representación. En ese doble proceso, el movimiento vecinal y el movimiento obrero discurrieron por caminos paralelos.

En último lugar, fue la de los sindicatos —especialmente las CCOO— y partidos políticos de izquierdas —sobre todo, pero no sólo, del PCE, fuertemente implicado en el movimiento obrero— por capitalizar el discurso social incipiente de los trabajadores-vecinos y, a partir de 1977, conducirlo por la vía institucional, dentro de una estrategia encaminada a acumular cuotas de poder, sobre todo a escala local.

Al menos dos razones justifican el haber abordado este estudio tratando de conservar la sensibilidad individual de un personaje de novela. La primera pasa por considerar que algunas mentalidades de individuos —pertenezcan o no a la ficción— tienen la capacidad de enlazarnos directamente con la realidad histórica. La segunda es que la capacidad de empatía resulta siempre tan necesaria como el rigor. Por todo esto, en este relato tienen tanta importancia los testimonios de algunos históricos líderes vecinales de los municipios de la periferia y eje sureste de la región madrileña como el resto de datos documentales aportados[1]. Es más, ambos tipos de fuentes tienen la virtud de completarse y confirmarse mutuamente.

BARRIO Y CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MADRID DESARROLLISTA

Entre 1962 y 1975, la provincia de Madrid registra un incremento poblacional de 1.582.000 habitantes, de los cuales cerca de un millón son inmigrantes. La tasa media de crecimiento anual es de un 4 por ciento, muy superior al 2,5 por

ciento previsto por el Plan de Ordenación Urbana de 1963 (Molinero e Ysàs, 1998, 52). A lo largo de la década de los setenta, los municipios que absorben el espectacular crecimiento poblacional registrado en la provincia de Madrid son los de su área metropolitana. Así lo señalan los censos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 1970 y 1981. Su análisis comparado permite contrastar el incremento del número de habitantes del municipio de Madrid, cifrado en 37.877 para la década de los setenta, con el del conjunto de los demás municipios, que asciende a 775.339 nuevos habitantes. Esto significó para todos estos nuevos núcleos urbanos doblar cuando menos su población, y en ciertos casos triplicarla (Torrejón, Leganés, Alcorcón), cuadruplicarla (Coslada) o quintuplicarla (Parla), hasta llegar al caso más impresionante de Móstoles, que pasó de contar con 17.895 habitantes en 1970 a 150.259 en 1981.

Los datos sobre la evolución del número de viviendas para la provincia hasta mediados de los ochenta apuntan elocuentemente a un déficit acusado de Viviendas de Protección Oficial (VPO) hasta el año 1980, que registra la cifra de 7.461 viviendas terminadas frente a las 27.000 de 1973 (Consejería de Política Territorial, 1985, 41; COPLACO, 1981, 82). A partir de 1981, en cambio, el número de VPO experimenta una dinámica de ascenso cuasi constante hasta alcanzar las 17.988 viviendas terminadas en 1985. No es casual que el punto de inflexión más bajo de la serie pertenezca al año 1980, y que a partir de ahí se observe un repunte. Y es que las fechas coinciden con el advenimiento de los primeros ayuntamientos democráticos. Esto obliga a señalar, por contraste, que la Administración local anterior no sólo no tuvo ninguna capacidad de previsión del incremento poblacional registrado en la provincia de Madrid en el periodo 1962-1975, sino que además no supo (o no quiso) hacerle frente con medidas, como la construcción de VPO que sí promovieron, en cambio, los ayuntamientos democráticos (a los que tampoco hay, sin embargo, que considerar por ello una panacea).

El análisis de los graves problemas de deterioro de viviendas registrados en todos los distritos de la capital a principios de los ochenta permite adentrarse en la lógica que pudo conducir a la Administración a desentenderse tanto del déficit de oferta de vivienda como del estado de degradación de las existentes (Consejería de Ordenación del Territorio, Medio ambiente y Vivienda, 1985, 73-74). Los casos más graves de deterioro se encuentran en el distrito Centro —debido a la antigüedad de las viviendas— y en distritos de la periferia del núcleo urbano, esto es, más allá del perímetro de la M-30, de construcción mucho más reciente. Las cifras más significativas son las de infravivienda —incluyendo las chabolas— en Vallecas, que afectan al 13,4 por ciento del total

de las viviendas del distrito, así como en Villaverde (6,42 por ciento). En cuanto a San Blas, cuenta con un 29,85 por ciento del total de sus viviendas registradas en estado de deterioro grave.

El más acusado estado de abandono de estos distritos no parece fruto del azar. Podría, en efecto, haber respondido a una estrategia por parte de la Administración en la que la concentración de funciones se producía de manera deliberadamente caótica (por ejemplo, Río Lafuente, 1984); sea como fuere, lo cierto es que desató entre los vecinos de los barrios el temor a un intento de expulsión más o menos tácita de la ciudad. El ejemplo del distrito de Vallecas, pionero en el apoyo vecinal a las luchas de sus trabajadores[2], resulta bastante ilustrativo. Desde el inicio de la década de los setenta, los vecinos de Vallecas desarrollan una identidad colectiva compacta y reivindicativa que está lejos de comulgar con un gobierno que no otorga reconocimiento a sus demandas (según se muestra en el estudio de Eli Lorenzi que forma parte de este volumen). Esta identidad se politiza en buena medida conforme se vuelve palpable el intento del municipio de desagregar ese foco de resistencia a la autoridad o bien permitiendo el deterioro del distrito, o bien mediante un intento directo de especular con terrenos y de paso alejar de la ciudad a los miembros de las organizaciones potencialmente más conflictivas. La sospecha la expresa uno de sus líderes vecinales de la época, Mariano Monjas García, ante una propuesta de los técnicos de COPLACO: "los vecinos se olían que lo que el Ayuntamiento quería era recolocar a los chabolistas en Alcalá de Henares y quedarse con los terrenos para recalificarlos". Esta situación bien pudo haberse vivido de manera similar en distritos como Villaverde o San Blas, pues ambos se caracterizaron, al igual que Vallecas, por una identidad especialmente reivindicativa entre sus vecinos (Río Lafuente, 1984).

El parque de viviendas de los municipios del eje sureste del área metropolitana de Madrid a comienzos de los ochenta presenta un mejor panorama que el de la capital, aun cuando sobresalen los porcentajes de viviendas deterioradas en Alcobendas (14,09 por ciento), Leganés (14,76 por ciento), Paracuellos (25,66 por ciento) y Pinto (29,57 por ciento). Pero los problemas más graves a los que se enfrentan los vecinos del área son los de la ausencia de infraestructuras asociadas a la vivienda.

Nadie podría describir con mayor acierto que ellos mismos este cúmulo de carencias. En el recuerdo de Jesús Romero Robledillo, a su llegada a San Fernando de Henares, en 1972: "el pueblo entonces no tenía absolutamente nada, era un desastre. Una constructora —Sánchez Lorbada— había dejado una urbanización —la Colonia Montserrat— [...] sin asfaltar las calles ni poner alumbrado y fue el

primer escándalo que hizo que la gente empezase a protestar. De hecho, el constructor había podido desinteresarse de estas 'minucias' porque se lo había permitido el concejal de Urbanismo de San Fernando en 1971-1972". El panorama evocado parece menos propio de una ciudad que de una "aldea", término que utiliza precisamente otro emblema del movimiento vecinal, Moisés Gil, para definir Coslada a finales de los sesenta. El testimonio del líder de San Fernando insiste de nuevo, además, en la desastrosa política urbanística de los años del *desarrollismo*. Por su parte Juan Antonio Sánchez, que llegó a Leganés en 1975, comienza recordando la ausencia de una red de transporte público, y desde ahí enlaza con un sinfín de carencias: "[Leganés] era un área de construcción muy desordenada y sin ningún apoyo de infraestructura de transporte. Sólo había unas camionetas que nos enlazaban con Madrid y se estropeaban cada dos por tres. No había colegios, ni asistencia sanitaria. Sólo ladrillos y casas puestas". El eco visible de las ausencias, que permite tomar estos testimonios como los de una sola voz colectiva, está en el origen de las movilizaciones masivas que hicieron retumbar las calles de la capital desde mediados de la década de los setenta.

La otra mitad de la situación es que la inmensa mayoría de estos vecinos son a su vez trabajadores asalariados de la industria. El análisis de la evolución de la ocupación del suelo industrial, a través del número de polígonos censados en la provincia de Madrid a partir de los años cincuenta en el eje sureste, demuestra que el desarrollo industrial de estos municipios se produjo en un lapso de tiempo breve, concentrado esencialmente en la década de los setenta —aunque en Getafe y Fuenlabrada ya existían precedentes— y que fue continuo y muy intenso (2.032 hectáreas destinadas a suelo industrial, ocupado o no, a lo largo de esta década) (Consejería de Economía y Empleo, 1997). El municipio de Madrid no experimentó, en cambio, semejante transformación. Esta diferencia se explica por el proceso de re-localización funcional de la industria orquestado por la Administración local franquista en 1961 por medio del Plan General para la Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. Dicho plan apostó por el eje sureste para la expansión industrial, y en particular por la zona de Villaverde, Vallecas y Vicálvaro, en la que debían repartirse 80 hectáreas de suelo industrial, así como por los municipios de la primera corona del área metropolitana, a los que irían destinadas, según las previsiones oficiales, otras 375 hectáreas. En 1975, sin embargo, un estudio del COCIM (1972, 122 y ss.) revela que la superficie realmente ocupada por la industria en el seno de los municipios del área ascendía a casi 1.600 hectáreas, una parte de las cuales había sido recibida no por la primera sino por la segunda corona del área metropolitana.

Esta cantidad tan superior a la planeada sobre el papel obliga a evocar el escandaloso sistema de corrupción que surgió en relación con la cesión pública de terrenos para la actividad industrial de las empresas. La absoluta falta de vinculación de los ayuntamientos de los municipios citados a la política de planificación central, unida al hecho de que bastaba con la simple concesión de una licencia municipal para realizar cualquier tipo de construcción, desembocaron en la proliferación de cesiones de terrenos a las empresas mejor postoras. Y lo más inquietante no es esto, sino que la Administración del municipio de Madrid, en lugar de truncar estas prácticas, las toleró procediendo a su legalización de hecho en 1967, al ofertar de golpe y a precio político 1.500 hectáreas industriales más, que no eran, en su mayoría, terrenos libres sino ya ocupados por las empresas, dando así pie a una auténtica amnistía urbanística. Este mismo cuadro se repitió en el propio municipio madrileño, lo que obliga a apuntar, además de a una falta de capacidad de previsión de los técnicos, a una política de permisividad (cuando no de beneplácito) del diseño especulativo de las empresas y sus inversores alrededor del proyecto de expansión de la industria en el eje sureste de la provincia.

Cuando los efectos de la crisis económica internacional desatada en 1973 empezaron a afectar a las empresas madrileñas, el impacto de las dificultades se magnificó tanto como se habían multiplicado las hectáreas de suelo destinadas a la actividad industrial. Esto dio pie a un espectacular aumento de la conflictividad laboral en el sector secundario, el más afectado por la crisis. El incremento en número y la virulencia de las protestas tienen su origen en los altos costes sociales derivados del cuadro de medidas adoptado por las empresas para afrontarla. Es importante describirlo, aunque sea de manera sumaria, para comprender el sentido de las movilizaciones posteriores de los trabajadores de las fábricas. La tendencia general fue a la reducción de la inversión de capitales privados, pero tratando de que no repercutiera en una disminución de la productividad. Ello se tradujo en una racionalización de la cadena productiva, así como en la intensificación de los ritmos laborales a través del refuerzo de las técnicas de la Organización Científica del Trabajo. Y llevó al despido de todos los trabajadores sobrantes. Merecen mención los datos sobre la evolución del número de parados: si en 1967 fueron 6.000 (lo que resulta prácticamente una situación de pleno empleo), inició desde ahí una dinámica de ascenso fulgurante hasta los 267.900 de 1985 (Reig Martínez, 1998, 102 y ss.). Y, aun más significativo, los niveles más altos de paro sobre población activa —con una tasa media cercana al 20 por ciento— se registraron precisamente en los distritos y municipios que más crecimiento industrial y de vivienda habían experimentado (Consejería del Territorio, Medio ambiente y Vivienda, 1986, 63 y ss.).

CANALES DE EXPRESIÓN DE LOS VECINOS-TRABAJADORES: LA CONQUISTA DE LA CIUDADANÍA

Ante una coyuntura análoga a la antes expuesta, en otros países se desataron en este periodo protestas, no ya sólo por la desigual distribución de los costes de la crisis, sino por el hecho mismo de que el fenómeno del desempleo rompía el sueño del pleno empleo en cierta medida garantizado por la intervención de las instituciones (Castel, 1997). En España, sin embargo, el contexto era distinto: aun existiendo ya entonces un movimiento obrero pujante, activar un ciclo de protestas callejeras implicaba romper con todo un imaginario colectivo, una cultura sobre el espacio público que mantenía a los españoles en la condición de meros súbditos del Estado y del mercado, y pasar a ciudadanos de hecho y derecho en todas las esferas de la vida pública, no sólo en los puestos de trabajo. Esto es lo que hicieron los habitantes de los barrios de la periferia madrileña a través de una serie de dinámicas paralelas en los barrios y en los centros de trabajo que los convirtieron en vecinos-trabajadores con conciencia de serlo.

La concepción por parte de la autoridad de unos ciudadanos nominales y súbditos de hecho permaneció invariable hasta la muerte de Franco. La definición de "ciudadano y consumidor" promovida por la propaganda sindical franquista afirmaba aún a la altura de 1974 que "es consumidor y ciudadano el que paga [...] el que espera pacientemente ante una ventanilla, el que no puede ver el azul del mar porque se lo impide una muralla de hormigón armado, y el que sufre las picaduras de mosquitos salidos de una cloaca que en otro tiempo se llamó río" (OSE, 1974). Ciudadano es, en suma, el que padece *sin quejarse* tanto la merma de su poder adquisitivo como la degradación de su entorno. En este sentido, Ysàs (2004) ofrece información adicional sobre el esfuerzo de re-semantización del término "ciudadanía" en la propaganda oficial desde el inicio de la década de los setenta con el fin de adecuarlo a su distinción perversa entre "ciudadanos virtuosos", es decir obedientes, y "minorías de agitadores".

Los trabajadores eran un objetivo primordial de esta propaganda aparentemente dirigida a definir el deber ser de todo vecino-súbdito. Así lo recoge críticamente un documento elaborado por la Comisión de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos, dentro del marco del estudio "Madrid en sus barrios", ante el folleto de propaganda de la inauguración del Gran San Blas: "las viviendas constituyen en cualquier caso una graciosa concesión del Estado, un triunfo que el sistema político consigue y concede al obrero. En estas condiciones [...] la vivienda ha de agradecerse. No puede exigirse mejor calidad,

ni tampoco el equipamiento y servicios inexistentes, aunque hayan sido prometidos y ensalzados como supuestamente constitutivos de la esencia de los nuevos conjuntos, verdaderas ciudades de estructura nuclear que, a su vez, pertenecen a la gran ciudad" (AV San Blas-Simancas, 1976).

La imagen transmitida acerca del Estado es la de una figura arbitraria que no tiene por qué rendir cuentas de sus actos a la ciudadanía, que aparece entonces ligada al ente soberano por un pacto de obligaciones sin reciprocidad.

En su Pleno de febrero de 1974, la Organización Sindical (OS), el sindicato oficial de la dictadura, achacó de hecho toda la culpa del aumento de la conflictividad laboral a la perversión y degradación del "espíritu" que tuvo en sus "orígenes" la estructura de la empresa, sentenciando que el Estado actual(mente) "fácilmente puede deducirse que no se ajusta a lo propugnado por nuestras Leyes Fundamentales, dado que no sólo no se subordinan los bienes económicos a los de orden humano y social, sino que, precisamente, refleja todo lo contrario". Afirmaciones como ésta ponen de manifiesto que la Administración se desentendió de la suerte de los trabajadores, cerrándose sobre sí misma y remitiendo a la mera existencia de la ley vigente como garante suficiente de la canalización y resolución de los conflictos.

Si no lo hacían las autoridades, ¿quién velaba entonces en estos tiempos de corrupción y crisis por la supervivencia de los vecinos-trabajadores de las periferias y cinturón industrial de la región madrileña? Lo cierto es que éstos habían comenzado a organizarse entre sí de manera autónoma, en parte a través de algunos canales que fue habilitando de manera contradictoria el propio sistema franquista. La adquisición, a partir de esa incipiente organización, de un nuevo repertorio de acción colectiva les permitió ir conquistando progresivamente la conciencia de ciudadanos que el régimen había estigmatizado; y gracias a ella, estuvieron en condiciones de conseguir, y eventualmente lograr, el estatus de derechos ciudadanos que les había sido negado hasta entonces.

Desde los barrios, la batalla por la vivienda de calidad que libraron los vecinos de San Blas se puede tomar como ejemplo paradigmático de este proceso de adquisición de la ciudadanía de hecho. El distrito de San Blas comenzó a organizarse a finales de los sesenta, pero el trato formal con las instituciones no revela al principio siquiera una conciencia incipiente como ciudadanos. Entre la documentación disponible destaca una carta con fecha de octubre de 1969, que proviene del Informe sobre San Blas de la AV San Blas-Simancas (1976), dirigida por los vecinos al Jefe Provincial de la Obra Sindical del Hogar (OSH) en relación con el estado de creciente deterioro de sus casas. El tono utilizado es extremadamente cauteloso, casi temeroso, ante la falta de costumbre de

hacerse oír: "suplicamos [...] se sirva V. I. dar las órdenes oportunas". La demanda se asemeja más a una petición de gracia que a una protesta. El mismo tono se mantiene en otra carta, redactada a finales de 1970 y dirigida a la atención del Ministro de Vivienda: "rogamos a V. E., si a bien lo tiene, ordene una inspección de todas las viviendas de esta Colonia [...] Es gracia que no dudamos alcanzar del bondadoso corazón de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años para el bien de la Patria". Sin embargo, a partir de 1973 tiene lugar un notable giro. En marzo, bajo la supervisión del Colegio Oficial de Arquitectos, se lleva a cabo un estudio completo sobre el hundimiento, agrietamiento y humedad de las VPO del Gran San Blas. El estudio señala directamente a la OSH como culpable y pide que ésta asuma los costes de reparación "y arbitre las medidas necesarias para su futura evitación". El 18 de octubre de ese mismo año, 500 vecinos del barrio salen a la calle al grito de "¡Vecinos, Unidad!" previo acuerdo de no pagar las rentas de sus casas, así como de remitir un escrito de protesta al Director Provincial de la OSH. La policía los disuelve e intenta detener a alguno de ellos. Al día siguiente, Ruiz Peinado, Director Provincial de la OSH, recibe a una delegación vecinal con la promesa de 250 nuevas viviendas para San Blas. En abril de 1974, sin embargo, ante el incumplimiento de la promesa, los vecinos inician una nueva correspondencia con el Director de la OSH. El tono utilizado revela que el movimiento se ha fortalecido: "el problema [...] no se solucionará mientras no nos sean entregadas viviendas dignas [...] V. I. es la persona más idonia [*sic*] [...] esta gestión es la última que podemos hacer de este carácter, por lo que esperamos se nos dé una solución rápida, ya que dada la gravedad del problema, nos veríamos obligados a tomar las medidas que consideremos oportunas".

En definitiva, en poco tiempo, de la petición de gracia se ha pasado al ultimátum. Los vecinos se han hecho ciudadanos cuando han dejado de mendigar los favores de la autoridad para pasar a exigir la obtención de sus derechos bajo la amenaza de iniciar nuevas oleadas de protesta cada vez más incisivas. Los vecinos de San Blas siguieron reuniéndose en asambleas para organizar sus estrategias de protesta, ya fuera en forma de cartas o de movilizaciones callejeras. Hasta finales de 1975, lo único que recibieron de la autoridad, sin embargo, fue más represión policial, así como la detención del presidente de su asociación de vecinos.

Mientras los vecinos se organizaban de manera asamblearia en sus asociaciones de barrio, desde las fábricas también se estaban gestando nuevos modelos de organización de democracia directa, radicalmente opuestos al sindicalismo vertical de la OSH, e incluso parcialmente independientes de las estructuras organizativas de CCOO, el principal sindicato obrero que se movía

entre los intersticios legales del régimen y la clandestinidad. En efecto, numerosos trabajadores se organizaron de manera asamblearia para debatir sus posturas ante las medidas de crisis adoptadas por los empresarios y eligieron a representantes para que las defendieran. Sobre esta base, los Comités Delegados reivindicaban para sí el espacio ocupado por los vocales jurados de empresa en las negociaciones colectivas, alegando que éstos no habían sido capaces de conjugar las demandas de todos los trabajadores. Así lo recoge Esteban Romero en un estudio sobre la Asociación Española de Dirección publicado en 1977: "estas nuevas fuerzas, surgidas en la base, han impuesto al empresario otros interlocutores en sustitución de los vocales jurados [...] hasta el extremo de negar cualquier tipo de validez, por residual que fuera, a los representantes sindicales elegidos a partir del sistema legal vigente".

En definitiva, tanto los vecinos desde sus barrios como los trabajadores en sus centros de trabajo se estaban organizando de forma asamblearia, creando estructuras autónomas desde la base. Al hacerlo se iban convirtiendo en ciudadanos de hecho, implicados, vigilantes y, a menudo, obligados a actuar al margen de los límites restringidos de la legislación. De hecho, a partir de 1976, aumentó la virulencia de las protestas en aquellos centros de trabajo en los que el movimiento obrero tenía fuerza, dado el nivel de frecuencia de huelgas salvajes originadas por la presión creciente de las bases, cuya actuación no cabía en la reciente Ley de Conflictos Colectivos, de 1975. Lo mismo puede decirse de las manifestaciones callejeras organizadas por un movimiento vecinal que empieza a recibir este nombre, y que llega a protagonizar escenas de guerrilla urbana en franca violación de la Ley de Asociación Política promulgada ese mismo año.

Lo que ocurría es que la legislación no avanzaba al ritmo del cambio sociopolítico. Ello convirtió en eje de las protestas la batalla por la legalización de las nuevas estructuras organizativas creadas en la lucha por la ciudad por parte de los vecinos-trabajadores. La consecución de la ciudadanía de derecho fue una pugna particularmente lenta, ardua, repleta de trabas y, en algún aspecto significativo, aún inacabada. Aunque una descripción exhaustiva de la misma obligaría a hacer un estudio aparte, resulta interesante destacar al menos algunos paralelismos entre la batalla librada desde las asociaciones vecinales y la que se entabló en el seno de las fábricas.

Si bien lo que se reclamaba desde los barrios era ante todo derechos civiles —de reunión y asociación— mientras que desde los centros de trabajo se demandaban en última instancia derechos de participación en las decisiones de la empresa, el objetivo era el mismo para ambos movimientos: poder reclamar cuestiones de naturaleza social y económica dentro de la legalidad, esto es, sin

sufrir represión policial ni ser objeto de multas y sanciones, como una actividad política legítima. Ambos movimientos confluían pues en la exigencia de unas organizaciones legales y verdaderamente democráticas. Pero además, la representación en las empresas, con elecciones libres entre los trabajadores, pasó a tener pronto un correlato en el seno del movimiento vecinal: la democratización de los ayuntamientos.

Por otra parte, tanto el movimiento vecinal como el obrero se sirvieron al principio del marco legal vigente para promover sus objetivos —el primero a través del marco de la Ley de Asociaciones de 1964 y el segundo de la legislación sobre convenios colectivos de 1958—, pero igualmente desde el principio se vieron forzados a emplear otras vías de organización y movilización paralegales e ilegales. Las parroquias, por ejemplo, sirvieron a los dos movimientos como primer centro de reunión clandestina y espacios desde los que ejercer la protesta, por ser lugares sometidos a menor control por parte de las autoridades y dotados de una cierta jurisdicción propia[3]. Estos primeros canales terminaron, sin embargo, por desbordarse, y la presión sobre las autoridades creció hasta el punto de generalizar la represión, para finalmente empezar a reconocer los cambios políticos y socioeconómicos que se estaban produciendo a un ritmo acelerado y a gran escala, así como la obsolescencia de las leyes en vigor.

El resultado de estas movilizaciones paralelas y concurrentes, a menudo complementarias al estar compuestas de una misma base social, esto es los vecinos-trabajadores, fue sin embargo desigual. El triunfo llegó para los trabajadores con la legalización plena del derecho de huelga en el Real Decreto 17/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones de Trabajo, contemplado después como derecho fundamental en la Constitución Española de 1978. Las asociaciones de vecinos, en cambio, no quedaron recogidas en el texto constitucional (cuando sí lo están las asociaciones de consumidores). Estas asociaciones, por lo tanto, se siguen apoyando en la actualidad en leyes que datan del franquismo, algo que no deja de ser una paradoja en un movimiento que puede blasonar de haber capitaneado la lucha contra el régimen franquista en momentos cruciales de la transición a la democracia.

LA CREACIÓN DEL DISCURSO VECINAL, ENTRE LA INFLUENCIA DE LOS SINDICATOS Y LOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS

El cuadro común de condiciones materiales, políticas, repertorio de acción colectiva y formas de organización de los vecinos-trabajadores de las periferias y municipios del cinturón industrial de Madrid induce muy naturalmente a

pensar que, si el movimiento vecinal y el movimiento obrero confluyeron con especial intensidad en algunas áreas, debió de ser en el seno de estos barrios propensos a aglutinar experiencias de doble militancia. Todos los líderes vecinales de la época lo confirman. "No estábamos solos en la lucha", rememora uno de ellos, Eloy Rodríguez Ortiz, que se implicó sucesivamente en las asociaciones de vecinos de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares a lo largo de la década de los setenta. Y concreta, al tiempo que se erige como portavoz de la experiencia compartida por sus compañeros de lucha de los demás distritos y municipios: "la relación con el movimiento obrero era directísima, una filosofía de reivindicaciones permanente, en la que en la fábrica se reivindicaba mejor salario y en el barrio, las mejoras". Una publicación de época con un título tan sugerente como *Fábrica y barrio: una misma lucha*, recoge este mismo testigo en su introducción, lo desarrolla y lo sitúa en un ángulo interesante al alejarlo de explicaciones reduccionistas sobre la creación de la identidad vecinal (Darris *et al.*, 1977, 7):

> *Todos los cronistas del movimiento ciudadano coinciden en afirmar que uno de los aspectos más importantes de la lucha que ha llevado a cabo hasta el presente es el de su solidaridad con otros sectores populares, y en especial con el movimiento obrero.*
>
> *Las Asociaciones de Vecinos, como entidades principales, si bien no exclusivas del movimiento ciudadano, han realizado campañas de difusión de las luchas obreras, han formado cajas de resistencia, han proporcionado locales, han creado solidaridad con las aspiraciones y luchas de los trabajadores.*
>
> *No cabe en esta nota un estudio en detalle acerca de cómo han de entenderse las relaciones entre movimiento obrero y movimiento ciudadano. Que se piense que la clase obrera ha de ser la clase dirigente del cambio político y social del país, no quiere decir, efectivamente, que el movimiento ciudadano deba ser el movimiento obrero bis, de la misma manera que es rechazable que entre uno y otro no deba existir relación alguna.*

Los autores apuntan a un vínculo de solidaridad entre los vecinos organizados en asociaciones de vecinos y los trabajadores de las fábricas cercanas, reunidos a su vez, o bien bajo las siglas de las CCOO —las cuales hasta el año 1976 no se consideraban a sí mismas como un mero sindicato de clase sino como todo un "movimiento político y social" (Ruiz, 2001)—, o bien bajo otro tipo de estructura incipiente, independiente y asamblearia. Pero también señalan, y esto es lo verdaderamente importante, una cierta autonomía de las

asociaciones de vecinos respecto del movimiento obrero. Este enfoque es interesante porque se desvincula de los esquemas simplistas que se atribuyen no ya al movimiento obrero en general sino también al Partido Comunista de España (PCE) —a menudo infiltrado en los barrios a través de los militantes de CCOO, aunque este sindicato nunca haya dejado de proclamar su independencia respecto del Partido Comunista—, todo el mérito de la eclosión, florecimiento —y también cierto marchitar— de las asociaciones de vecinos desde el inicio de los setenta hasta, al menos, las significativas primeras elecciones municipales de la democracia, celebradas en 1979. Esto no invalida la presencia notable y el constante trabajo del partido en las asociaciones de vecinos, pero sí matiza la condición de vanguardia que se atribuye el mismo y que ha sido aceptado con demasiada frecuencia por estudiosos del tema. Hechas estas aclaraciones, no deja de ser interesante acercarse a las motivaciones del Partido Comunista a la hora de implicarse activamente en las protestas de los barrios.

Desde mediados de los sesenta, el análisis de la correspondencia interna del PCE (Archivo del PCE, 1966) revela que el partido está prestando atención a las huelgas de trabajadores que reciben apoyo vecinal. La presencia de los vecinos en estas acciones colectivas de trabajadores es entendida como una muestra de solidaridad ciudadana puntual y espontánea, una energía potencialmente canalizable y a la que se le puede imprimir una dirección, dentro de una voluntad de ampliación de bases del partido. Esto justifica que, en los años siguientes, se produjera un amplio seguimiento de la cronología de las protestas de los barrios, según se muestra en los documentos del archivo del PCE.

En realidad, a lo largo de sus últimos años de clandestinidad, el PCE se esfuerza por sumar a las protestas de los obreros, además de a los vecinos de la barriadas del eje industrial, también a sectores de las clases medias: pequeños profesionales liberales a los que preocupa la desastrosa planificación urbanística municipal[4], así como pequeños comerciantes que padecen los efectos de la especulación y las iras de las familias que acuden a sus comercios, e incluso, al advertir las incipientes fracturas en la estructura del régimen, a falangistas de la rama joseantoniana. Todo esto llevó a que el movimiento ciudadano adoptase un perfil verdaderamente interclasista.

Ante las escasas posibilidades tácticas y estratégicas que ofrece el marco político, las primeras manifestaciones callejeras que secunda el PCE son para protestar por la carestía de la vida, a partir de 1972. El PCE acertó al pronosticar que se obtendría el apoyo de un mayor número de vecinos y trabajadores si se apostaba por un programa de reivindicaciones de tipo práctico. Y, en efecto, en las manifestaciones contra la carestía de la vida podían converger en un

mismo grito tanto las amas de casa —que eran las encargadas de llenar la cesta de la compra— como los pequeños comerciantes y, por supuesto, los trabajadores que observaban ante un panorama de inflación galopante cómo el aumento nominal de sus salarios no se traducía en una ganancia efectiva de poder adquisitivo[5]. El fomento de esta temprana convergencia entre un movimiento obrero ya asentado y un movimiento vecinal en ciernes no deja de enmarcarse dentro de un ambicioso plan de futuro: una huelga general, para la que se necesitaría el mayor apoyo ciudadano que se pudiera recabar. Este horizonte mítico se puede observar de nuevo en la correspondencia clandestina del PCE, en la que aparecen reiteradamente las siglas "HG" [Huelga General] junto a los documentos que describen las manifestaciones en contra de la carestía de la vida.

Los datos del CIDUR nos desvelan que, en 1975, las asociaciones de vecinos ya poseen una estructura organizativa bastante sólida, y esto gracias esencialmente a la labor intensa de los militantes del PCE. El partido estaba, por lo tanto, profundamente implicado en la organización de las protestas de los barrios, así como en la orientación ideológica de las mismas. En efecto, muchos vecinos de los barrios se sentían comunistas. El testimonio del emblemático líder vecinal Félix López Rey resulta elocuente al respecto: "yo soy comunista, pero es que me hice comunista en la lucha de barrio, no llegué al barrio siendo comunista". Esto no significa necesariamente que el movimiento vecinal estuviera controlado por el PCE, sino que éste supo capitalizar la oposición al franquismo, alentando las protestas que demostraban una agudización de su crisis de legitimidad, y consiguiendo que la identidad comunista se asemejara a la del antifranquista.

La evolución de las relaciones entre movimiento vecinal y movimiento obrero en las calles de Madrid entre 1976 y 1979 constituyen una excelente radiografía del peso y la iniciativa de cada uno de ellos en la reacción al contexto político y material en el que se encontraban. A lo largo del año 1976, los sindicatos en calidad de promotores de las manifestaciones logran reunir a 79.000 ciudadanos en las calles de Madrid, frente a los 208.000 de las asociaciones de vecinos (Adell, 1989). De 145 actos reivindicativos registrados, el 43,1 por ciento es impulsado por los primeros y el 22,1 por ciento por las segundas. Esto significa que, en los primeros meses del periodo de transición, las asociaciones de vecinos poseen mayor capacidad de movilización, puesto que llevan a las calles a más ciudadanos en un número menor de actos. Esto las convierte en el canal de expresión y organización de la oposición más importante del inicio del cambio político a la democracia.

El detalle del año 1977, en el que el número de protestas callejeras aumenta hasta la cifra de 170, arroja dos giros significativos. En primer lugar, los

sindicatos han aumentado espectacularmente su capacidad de movilización puesto que, habiendo organizado el 29,5 por ciento de las protestas, han conseguido reunir en las calles de la ciudad a 643.000 madrileños. Acontecimientos como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, la legalización del PCE y las elecciones generales de junio son motores clave de ese ascenso. En segundo lugar, las asociaciones de vecinos promueven a lo largo del año el 35,2 por ciento de las movilizaciones y registran un total de convocatoria de 240.000 ciudadanos. La traducción directa de estos datos ofrece un cuadro de menor afluencia en cada protesta organizada por las asociaciones, pero con un incremento del número de manifestantes, que obedece a la proliferación de asociaciones de vecinos que, además, empiezan a concentrarse en objetivos estrictamente propios de cada barrio y se enfrentan a la dificultad creciente de coordinar entre sí a la amplitud y heterogeneidad de grupúsculos que ha sido reunida bajo el apelativo de movimiento vecinal.

Los sindicatos, después de haber obtenido reconocimiento institucional a cambio de aceptar la "ruptura pactada" sellada en los Pactos de la Moncloa a finales de 1977, prosiguen su andadura cosechando unos resultados en las calles similares a los del año anterior. Las asociaciones de vecinos, en cambio, reúnen a muchos menos ciudadanos en cada acto reivindicativo que promueven. El número de movilizados por el movimiento vecinal desciende, en efecto, hasta los 180.000, pasando los actos públicos vecinales al 33 por ciento de las protestas en espacios abiertos. La dificultad de coordinación se acentúa, a la vez que se van agotando las motivaciones políticas, por la amnistía, la legalización de sus asociaciones y la democratización. La democracia está llegando, sí, pero no se está construyendo con la colaboración de la base de la ciudadanía, ni en las fábricas ni en los barrios, sino con la de la cúpula de los partidos políticos, sindicatos y demás grupos de presión en los despachos de La Moncloa. La dinámica de reivindicaciones materiales particularizadas para cada barrio se refuerza.

El año 1979 es en el que la participación vecinal baja de manera más drástica puesto que las asociaciones de vecinos sólo llevan a la calle a 33.000 ciudadanos, quedando esta cifra prácticamente doblada incluso por la de los estudiantes. Pocas manifestaciones vecinales consiguen reunir a más de mil asistentes y la dispersión ya es un hecho consolidado. Este año es particularmente interesante, en tanto que en abril tienen lugar las primeras elecciones municipales de la democracia, y es de notar la implicación de las asociaciones de vecinos en todas aquellas acciones encaminadas a alentar la participación así como en la presentación de candidaturas de izquierdas, por ser los partidos de este signo político los que se habían comprometido con la agenda de reivindicaciones sociales promovida desde las asociaciones.

La AV de Arganzuela constituye un buen ejemplo de la voluntad de los vecinos organizados por promover la afluencia masiva a las urnas (Archivo de la Fundación 1º de Mayo, 1977). Dicha asociación, en efecto, invitó a representantes de los partidos de izquierdas (PSOE, PCE, PSP, Izquierda Democrática, Candidatura de los Trabajadores de Izquierda...) a explicar los programas de sus partidos a sus socios, a disposición de los cuales también se puso "en los locales de la Asociación un servicio de asesoramiento sobre técnica electoral para que consultéis cualquier problema que os surja". Las asociaciones de vecinos actuaron entonces, tal y como han señalado y alabado numerosas publicaciones desde 1979, como escuelas de ciudadanía. Pero de una ciudadanía que sólo podría manifestar su opinión respecto de sus gobernantes una vez cada cuatro años.

Por entonces, no obstante, los vecinos y sus líderes consideraban que el resultado de las elecciones locales podría ser muy determinante para la resolución de los problemas de las barriadas. Muchos de los líderes vecinales fueron captados por el PCE —cuyos militantes de base utilizaban el lenguaje cercano de los obreros— para presentar su candidatura a estas elecciones. La estrategia del PCE se había modificado desde los primeros años de la década de los setenta. Después del mal resultado obtenido en las generales de 1977, que causó sorpresa y estragos en el seno del partido, éste había redirigido su estrategia de máximos de subvertir las estructuras capitalistas del Estado y del mercado hasta la aspiración menos ambiciosa de conseguir el poder a escala local. Los líderes vecinales, figuras dotadas de autoridad en el seno de sus barrios, eran una pieza clave del proceso. Su trasvase desde la lucha de barrio hasta la arena política tuvo como fatal resultado para las AAVV que muchas de ellas quedaron descabezadas, lo que contribuye a explicar el descenso del número e intensidad de los actos reivindicativos promovidos por las mismas a lo largo de 1979.

Pese a la escasa implicación de los socialistas en las protestas de los barrios de las periferias, los resultados de las elecciones les fueron muy favorables, en la repetición del "giro hacia el centro-izquierda" ya señalado para las legislativas de 1977. En líneas generales, en la periferia y en los municipios del eje sureste del área metropolitana, aumenta el porcentaje de votos al PSOE y al PCE (y, en menor medida, a grupos de extrema izquierda, como la ORT) con respecto a los resultados obtenidos en la capital[6]. Esto equivale a señalar una victoria de la izquierda en todos los distritos en los que más se había desplegado la actividad del movimiento obrero y vecinal durante el franquismo y la transición. En general, en los pueblos industrializados a toda prisa y con mayores carencias de infraestructuras del área metropolitana, la victoria de la izquierda fue mucho más rotunda que en Madrid capital, a la vez que fue mucho

más disputada la victoria de los socialistas respecto de los comunistas. El PCE llegó a conseguir alcaldías en los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Arganda del Rey y Pinto y una cuota de poder en los demás municipios del cinturón industrial de una media del 30 por ciento. Esta cifra, traducida en concejales y alcaldes del PCE (muchos de los cuales venían de un trasvase desde el movimiento vecinal) hicieron que las expectativas depositadas en la actuación de los nuevos ayuntamientos democráticos fueran enormes. Éste es otro factor que explica el frenazo de la actividad reivindicativa de las asociaciones de vecinos, puesto que decidieron otorgar un margen de confianza a sus nuevos políticos municipales, que hasta unos meses antes habían sido simples vecinos particularmente implicados en las demandas de obtención de mayores infraestructuras y dotaciones para sus barrios.

Pero las soluciones se demoraron y, coincidiendo con el ambiente general de "desencanto" de muchos votantes de izquierda, entre los militantes vecinales se extendió la sensación de traición por las promesas incumplidas y las críticas de "aburguesamiento" hacia sus dirigentes locales por su inacción ante los viejos problemas de los barrios que seguían sin resolverse. La síntesis del utilitarismo del que hizo gala el PCE respecto de las asociaciones de vecinos está muy bien expresada en la analogía de Javier Angulo Uribarri (1978, 40): "la posición que adoptan algunas personas, sectores o partidos (respecto al movimiento vecinal) se parece mucho a la de aquella señora que despide a su empleada del hogar porque se ha comprado un lavaplatos".

La ausencia de reconocimiento del movimiento vecinal y sus organizaciones ha sido señalada en múltiples ocasiones por expertos y testigos por igual. Sin embargo, al hacer un balance del protagonismo de las asociaciones de vecinos en la consolidación de la democracia, se cargan en exceso las tintas en ese declive final del movimiento en los años finales de la transición. Con ello se está perdiendo de vista tal vez lo más elemental y que debiera haber sido visto como evidente desde tiempo atrás: la crucial contribución del movimiento vecinal a la gestación y despliegue de un lenguaje sobre los derechos sociales en la cultura política de la democracia española. Fueron en efecto, las protestas vecinales las que, a lo largo de los años setenta más señaladamente lograron generalizar un discurso sobre los servicios para los ciudadanos, suministrables a escala de barrios en forma de dotaciones e infraestructuras sanitarias, educativas, culturales, de transporte, de ocio y esparcimiento, etcétera. Si existe en España algo parecido a un Estado del bienestar, los vecinos-trabajadores organizados tienen su parte en ello, no sólo en su demanda, sino en la articulación de la cultura en la que se apoyan todas las políticas sociales desde finales de los años setenta.

Aunque faltan estudios que lo comprueben, es posible incluso ir algo más lejos y sugerir que, pese a quedar excluidas del reconocimiento constitucional, las asociaciones de vecinos han dejado su huella en la Constitución de 1978 en artículos que mantienen una vigencia y actualidad incontestables. Es el caso del artículo 47, esto es, el derecho a una vivienda digna, unido al compromiso de desarrollar políticas de control de la especulación urbanística. ¿Cómo explicar que los representantes de los partidos políticos mayoritarios del arco parlamentario decidieran incluir este artículo en el texto constitucional si no es la intensa y generalizada presión ciudadana desde comienzos de los años setenta en demanda de garantías y calidad en las viviendas de los nuevos barrios? Como este texto ha tratado de mostrar, la canalización de esa demanda es una de las señas de identidad del movimiento vecinal.

CONCLUSIÓN: ¿HISTORIA O ACTUALIDAD DE UNAS LUCHAS CONCURRENTES?

Tanto en los barrios degradados de las periferias como en los municipios del eje del cinturón industrial se entrelazaron significativamente los discursos y acción del movimiento vecinal y el movimiento obrero. Las confluencias fueron propiciadas por la doble identidad de vecinos-trabajadores de los habitantes de estas áreas, que los condujo a su vez por una senda de doble militancia a partir de una conciencia crecientemente anti-franquista y democrática. A través de estructuras organizativas de democracia asamblearia, las asociaciones de vecinos articularon un discurso social de protesta y reivindicación de una ciudad dotada de infraestructuras y servicios de la que carecía. Esto tuvo lugar, por un lado, ante un aparato administrativo que inicialmente les negaba toda visibilidad y reconocimiento y, por otro, ante la voluntad de algunos sindicatos y partidos políticos de izquierdas de capitalizar ese discurso en virtud de unos intereses propios. En el proceso de construcción de la ciudad, los vecinos-trabajadores se fueron haciendo ciudadanos.

Ni el movimiento obrero ni el movimiento vecinal deben considerarse entes dotados de conciencia atemporal ni compartimentos estancos. La historia de su confluencia debe incorporar necesariamente una componente de heterogeneidad pues, a lo largo del arco temporal considerado, sus experiencias de democracia radical en el seno de las fábricas y de los barrios se contraponen al tipo de estructura jerárquica promovida desde las cúpulas de los sindicatos y partidos políticos de la izquierda menos moderada, sobre todo a partir del reconocimiento institucional de los mismos y del agotamiento de

las protestas de carácter político (Sánchez León, 2009). Quizá la mejor manera de entender el movimiento ciudadano sea desde la perspectiva de sus actores, que no se definían sino como "gentes con inquietudes", expresión recurrente en el testimonio de todos los líderes vecinales entrevistados para referirse a las primeras redes de militantes en el seno de sus barrios.

En la actualidad, existen nuevos grupos vulnerables a los vaivenes del mercado y especialmente desprotegidos por las políticas públicas. Son numerosos jóvenes e inmigrantes, a menudo encuadrados dentro del apelativo de "precarios". Si el movimiento vecinal comenzó su andadura siendo un movimiento interclasista, aún podría nutrirse de estos nuevos colectivos y reeditar su sinergia con el movimiento obrero. Esto, eso sí, siempre que las nuevas generaciones de "gentes con inquietudes" consigan canalizar sus demandas a través de un discurso social renovado y respaldado por estructuras organizativas sólidas y bien coordinadas.

NOTAS

1. Estos testimonios proceden de un trabajo de investigación elaborado por Marcello Caprarella, con título, *La crisis final del franquismo, la transición y la consolidación democrática en Madrid. Un estudio multidisciplinario (1973-1986)*, actualmente inédito, del que procede también la mayor parte de la información documental y bibliográfica que ha hecho posible este artículo.
2. Ejemplos de ello son las cajas de resistencia creadas por los vecinos en 1970 y 1971 durante las huelgas del sector de la construcción, el respaldo de las asociaciones vecinales a la lucha de los trabajadores de la empresa Borondo en 1973, así como el apoyo a las huelgas de Comylsa (la constructora que levantaba el campo de fútbol del Rayo Vallecano).
3. Las relaciones entre la Iglesia y el régimen se venían deteriorando desde el comienzo del Concilio Vaticano II, que defendía una postura más abierta en lo tocante a los derechos civiles. La declaración conciliar *Gaudium et spes* tuvo especial eco en España, y particularmente su párrafo 73, que afirmaba que "la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y el gobierno de la cosa pública". Muchos curas se apoyaron en interpretaciones de este tipo para albergar y fomentar la organización de vecinos en los barrios marginales.
4. Este acercamiento desembocó concretamente en 1975 en la exposición *Madrid en sus barrios*, organizada por el Colegio de Arquitectos en colaboración con las asociaciones vecinales del Barrio del Pilar, Moratalaz, Palomeras Altas, Palomeras Bajas, Orcasitas y San Blas y la vinculación de más de un centenar de profesionales de distintas ramas (urbanistas, arquitectos, pero también abogados y médicos), casi todos ligados al PCE y que se declaraban dispuestos a colaborar con las asociaciones vecinales.
5. Los datos sobre la evolución del gasto familiar en alimentación y bebida ilustran bien el estancamiento prolongado del poder adquisitivo de los madrileños: si en el periodo comprendido entre marzo de 1964 y marzo de 1965 este gasto corresponde al 39,1 por ciento del gasto total familiar anual, una década más tarde —entre julio de 1973 y junio de 1974— apenas ha descendido al 38,5 por ciento (Fundación FOESSA, 1967, 133-137; INE, 1975). A lo largo del bienio 1980-1981, en cambio, la cifra cae significativamente hasta un 27,6 por ciento del total (INE, 1985), lo que se explica en gran medida por la presión ejercida por las repetidas movilizaciones de los trabajadores a lo largo de la década de los setenta.
6. En el conjunto de los distritos del municipio de Madrid, la UCD consigue una media del 40,1 por ciento de los votos frente al 39,4 por ciento del PSOE y el 14,5 por ciento del PCE. En los municipios del eje sureste, en cambio, las tendencias son muy distintas: el PSOE aumenta su media hasta un 43,5 por ciento y el PCE hasta el 30,1 por ciento. Ambas cifras se sitúan muy por encima del escaso 17,6 por ciento de la UCD, convertida en tercera fuerza política. (Consejería de Cooperación, 1995).

BIBLIOGRAFÍA

AV San Blas-Simancas (1976), *Informe sobre San Blas*, Madrid.

ADELL ARGILÉS, R. (1989), *La transición política en la calle. Manifestaciones políticas de grupos y masas en Madrid (1975-1987)*, Colección Tesis Doctorales Universidad Complutense, 283.

ANGULO URIBARRI, J. (1978), *Municipios, elecciones y vecinos. Por unos ayuntamientos democráticos*, Madrid, Ediciones de la Torre.

ARCHIVO DEL PCE (1966), documento microfilmado *Jacq* 157.

ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO (1977), *Expedientes*, 7-9.

CASTEL, R. (1997), *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Barcelona, Paidós.

CIDUR [CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN URBANA] (1975), *Barrios*, Madrid.

CONSEJERÍA DE COOPERACIÓN (1995), *Atlas electoral de la CAM*, Vol. I, Madrid, CAM.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (1997), *Inventario de Áreas industriales susceptibles de mejora y rehabilitación en la Comunidad de Madrid*, Madrid, CAM.

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (1985), *Datos sobre la Vivienda en la Comunidad de Madrid*, Madrid, CAM.

— (1986), *La influencia de la crisis económica sobre el territorio*, Madrid, CAM.

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL (1985), *La vivienda en Madrid. Análisis espacial de la dinámica residencial en la región*, Madrid, CAM.

COCIM [CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID] (1975), *Localización y estructura de la industria de Madrid y su área de influencia*, Madrid, COCIM.

COPLACO [COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN] (1981), *Directrices de Urbanismo del Plan del Área Metropolitana de Madrid*, Madrid, MOPU.

DARRIS, G., GALLET, E., MATULIC, M., REY, E., STAUB, M. (1977), *Fábrica y barrio: una misma lucha*, Madrid, Editorial Mañana.

DOMÈNECH, X. (2002), "El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma", en *Historia Social*, 42, pp. 123-143.

ESTEBAN ROMERO, A. (1977), "Los derechos sindicales en la empresa", en *Asociación Española de Dirección de Personal, Reivindicaciones y conflictos laborales*, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones.

FERRES, Antonio (1983), *Cuentos*, Madrid, Alianza.

FUNDACIÓN FOESSA (1967), *Informe sociológico sobre la situación social en Madrid*, Madrid, Cáritas.

LANDERO, L. (1999), *El mágico aprendiz*, Madrid, Círculo de lectores.

INE (1975), *Encuesta de presupuestos familiares (julio 1973-junio 1974)*, Madrid, Ministerio de Planificación y Desarrollo.

— (1985), *Encuesta de presupuestos familiares 1980-1981*, Madrid.

MOLINERO, C. e YSÀS, P. (1998), *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI.

ORGANIZACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA (OSE) (1974), *Pleno de febrero de 1974. Estudios y conclusiones*, Madrid.

REIG MARTÍNEZ, E. (dir.) (1998), *Capitalización y crecimiento de la economía madrileña. 1955-1997)*, Bilbao, Fundación BBV.

RÍO LAFUENTE, Mª I. (1984), *Industria y residencia en Villaverde: génesis de un paisaje urbano en la periferia de Madrid*, Madrid, Universidad Complutense.

RUIZ GONZÁLEZ, D. (2001), "Las Comisiones Obreras, movimiento sociopolítico (1958-1976)", en ORTIZ HERAS, M., RUIZ GONZÁLEZ, D. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, F. (coords.), *Movimientos sociales y Estado en la España Contemporánea*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 405-424.

SÁNCHEZ LEÓN, P. (2009), "Invisible radicals. Identity cleavages in civil society and social movements during the Spanish transition to democracy", en ALONSO, GREGORIO y MURO, DIEGO (eds.), *Politics and Memory of Democratic Transitions: the Spanish Model*, Londres, Routledge.

YSÀS, P. (2004), *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Barcelona, Crítica.